



El círculo vicioso de la desigualdad y la inseguridad

Por Martín Verrier

Lic. en Relaciones Internacionales.
Universidad de Belgrano.
@verrierm



La inseguridad magnifica la pobreza y la desigualdad. Este no resulta ser un dato menor para una Argentina que posee el 19,2% de los hogares bajo la línea de la pobreza y una creciente criminalidad. A pesar de que los índices delictivos han tendido a mejorar desde el año 2003, desde el año 2008 se registra un nuevo aumento.

En 2008, último año relevado por el Sistema Nacional de Información Criminal, en la Argentina se registraron oficialmente nada más ni nada menos que 1.310.977 delitos. Esta cifra representa un aumento del 42% con respecto a la cantidad registrada en 1998, 922.948 delitos. Si lo comparamos con el comienzo de dicha década, el aumento resulta aun más pronunciado: 163% de aumento con respecto a los 498.290 delitos registrados en 1991. Este aumento se traduce en una tasa de crecimiento anual de 9,6%.¹

Esta tasa de crecimiento delictivo del 9,6% anual no hace más que confirmar la “sensación” de inseguridad, fenómeno subjetivo que refleja un dato objetivo: la involución que desde hace varios lustros sufre el país en materia de criminalidad. Esta situación ha dado lugar a numerosos debates en la sociedad, que se han centrado en las consecuencias de la inseguridad, en quien y porque delinque, en la política penal y procesal adecuada para enfrentar este contexto y en la relación existente entre el aumento de la desigualdad de ingresos y los índices delictivos. Sin embargo este debate no es nuevo ni en Argentina ni el mundo.

1. Dirección Nacional de Política Criminal – Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH.

En estos últimos 500 años muchos han sido los teóricos que han buscado encontrar las causas intrínsecas de la criminalidad. Desde Lombroso hasta Becker, desde la biología a la económica, diversos paradigmas han creído encontrar las causas de la criminalidad. Repasemos brevemente estas corrientes teóricas brevemente para poder comprender cuales son las teorías vigentes sobre los determinantes del delito.

Muchas de esas teorías han evolucionado hasta hoy en día y se pueden dividir en cinco corrientes teóricas principales. La primera corriente, denominada "elección racional", sostiene que delinquir es una decisión voluntaria que toman algunos individuos teniendo en cuenta costos y beneficios. La segunda corriente es denominada biológica/psicología y explica la criminalidad desde el punto de vista de la psicología y la biología, sosteniendo que cuestiones neurológicas genéticas, influyen en la conducta de los delincuentes. La tercera, denominada "estructural" ubica el origen de la criminalidad en el entorno en el cual se desarrolla el individuo. De alguna manera derivada de la corriente psicológica, la corriente de la "socialización" ubica al origen de la criminalidad en la influencia de las diferentes socializaciones a las que está sujeto el individuo. Finalmente, y emparentado con las corrientes de pensamiento crítico marxista, la corriente "del conflicto" defiende la idea que la criminalidad es resultado de la tensión de clases en la lucha por recursos limitados.

Lo cierto es que la mayoría de los criminólogos, aun en nuestro país, combinan elementos de varias de estas corrientes teóricas, ya que existe el consenso de que ninguno de los factores enunciados explica de por sí la conducta delictiva. Pero también es cierto que algunos de estas teorías gozan entre la comunidad de mayor consenso como explicación de la criminalidad. En Argentina, el debate sobre las causas de la criminalidad ha transitado casi exclusivamente por el camino de la denominada "teoría del conflicto". A esta corriente se le ha opuesto en nuestro país la de la "elección racional" (que explica el apoyo al populismo sancionatorio). Sin embargo, diversas encuestas de opinión demuestran que la gran mayoría de los argentinos están convencidos que la inseguridad se explica a partir de la importante desigualdad en los ingresos que registra el país.

Lo importante, es que probablemente en eso no están equivocados. Con tan solo ver el mapa de criminalidad de los países del mundo, el lector puede observar que hay una coincidencia absoluta entre desigualdad y criminalidad. No por nada la región latinoamericana es a la vez la más desigual y la más insegura del mundo en términos de criminalidad². Diversos estudios demuestran una clara y directa incidencia de la desigualdad en relación con la inseguridad. En Argentina entre 1994 y 2003 el crecimiento de la des-

igualdad en términos del índice de GINI fue acompañado de forma clara por el crecimiento de las tasas delictivas. Mientras que en 1993 Argentina presentaba un índice de Gini de 0,445 y una tasa de criminalidad de aproximadamente 1900 delitos cada 100.000 habitantes, en 2002 al pasar a un índice de Gini de 0,47, la tasa de criminalidad aumento a 3500 delitos cada 100.000 habitantes³. Estudios similares han llegado a conclusiones similares en otras partes del mundo. En los EEUU, en 1983 un concienzudo estudio demostró una clara correlación de desigualdad y crimen en 50 poblados de más de 50.000 habitantes en los Estados Unidos.⁴

Hasta aquí se ha podido establecer la relación entre desigualdad y criminalidad pero solo desde un punto de vista: el del victimario, el punto de vista de las causas que llevan a un individuo a delinquir. Queda entonces un interrogante que suele quedar vacante en el debate sobre la criminalidad en la región. Este interrogante tiene que ver cómo afecta la relación entre desigualdad y criminalidad pero a las personas, de existencia visible o ideal. Cuáles son las consecuencias reales del delito.

Es así que el lector podrá observar que ante la creciente criminalidad es poco lo que se ha dicho tanto en los medios, como en los debates académicos sobre las consecuencias sociales y económicas de la inseguridad para el estado nacional como unidad política pero también para los ciudadanos como víctimas de la misma. A través de las normas penales el estado regla que conductas considera punibles y cuáles no, pero las consecuencias para la sociedad de la criminalidad exceden el ámbito normativo y judicial.

Lo cierto es que, por razones que veremos a continuación, la criminalidad resulta un factor fuertemente regresivo en términos económicos y sociales para las sociedades de la región. La criminalidad le impone diversos costos a todas las sociedades. Pero estos costos son difíciles de estimar. ¿Cual es, por ejemplo, el costo de ser asaltado? Si bien es difícil estimar los costos de la inseguridad, es posible hacer una estimación general de los mismos, a partir de su identificación:

Costos directos a la víctima: propiedad robada o dañada, sufrimiento físico y psicológico, salud.

Costos indirectos a la sociedad: costo del sistema de justicia, policía, fiscalías, prisiones, seguridad privada, seguros, tecnología de prevención.

Así por ejemplo un robo conlleva costos para un individuo en términos del bien material que perdió, del lucro cesante por el daño físico y/o psicológico que haya sufrido, de lo erogado en salud. Para la sociedad ese robo conlleva gastos en términos de la fuerza policial encargada de asistir al damnificado, encontrar al culpable y evitar otros robos

2. FAJNZYLBER, Pablo; LEDERMAN, Daniel; LOAYZA, Norman, "Determinants of crime rates in Latin America and the world: an empirical assessment", Washington, World Bank, 1998, p.2.

3. BURZACO, Eugenio, GARAVANO, Germán, GORGAL, Diego, "Mano Justa", Buenos Aires, El Ateneo, 2004, p.59.

4. CARROLL, Louis; JACKSON, Peter, "Inequality, Opportunity, and Crime Rates in Central Cities" *Criminology* 21, 2, May 1983, pp. 178-94.



similares, al sistema de justicia para encausar al acusado, al sistema penitenciario en gastos de reclusión del detenido y costos en términos de prevención privada para la sociedad al observar la ocurrencia de estos delitos.

Pero un delito también afecta a la economía del lugar donde fue cometido. La criminalidad reduce la expectativa de vida, modifica comportamientos de los ciudadanos como consumidores, reduce la productividad, y aumenta los costos de producción, distribución y venta de los bienes y servicios. En definitiva la criminalidad reduce la inversión en capital humano y material. Cada empresa que desiste de invertir o ampliar su inversión a causa de la inseguridad representa decenas de oportunidades perdidas para incorporar empleos formales a la economía.

Y aquí reside el punto más importante del presente artículo. La criminalidad no solo es resultado de la desigualdad de ingresos, sino que además afecta seriamente a la economía de los países, impactando en todo los sectores socioeconómicos, pero a aquellos más desfavorecidos en particular. El lector seguramente habrá pensado que los sectores más acomodados son los que sufren más la inseguridad y quienes más impulsan el reclamo por una mayor seguridad. Aunque parezca paradigmático y contrario al sentido común, la criminalidad afecta de forma magnificada a los sectores económicos más desfavorecidos.

De acuerdo a un informe sobre Argentina encabezado por Rafael Di Tella, la tasa de victimización de robos para los sectores más acomodados creció entre 1990 y 2001 un 86%. La misma tasa de victimización entre los sectores económicamente más postergados creció un 254%. La diferencia resulta aun más pronunciada si se analizan las tasas de victimización de robo específicamente sucedidos en hogares. En ese caso los más ricos sufrieron un retroceso en la victimización del 18%, mientras que los sectores más pobres de Argentina sufrieron un aumento en este caso del 140%⁵.

El que los sectores más pobres se vean más afectados por la inseguridad no resulta en definitiva ninguna sorpresa si se analiza detenidamente los recursos con que cuentan los diferentes sectores sociales para evitar la victimización en un entorno donde el estado es cada vez menos efectivo para contener y prevenir el delito.

Los sectores más pudientes, gracias a sus ingresos superiores, responden ante el crecimiento delictivo contratando seguridad privada, instalando alarmas y movilizándose en automóvil. Para los sectores de menos recursos, estas estrategias defensivas resultan directamente inviables, lo que los transforma en “objetivos fáciles” para el crimen.

Pero los sectores más pobres de la sociedad no solo

sufren la criminalidad de forma directa, sino que también la sufren de forma indirecta por sentir con mayor magnitud las alteraciones en el mercado de trabajo, ya que como se dijo previamente, la criminalidad condiciona directamente el nivel de inversión y de generación de puestos de trabajo.

Un país más inseguro es ante todo, un país con menor crecimiento y menos oportunidades de inversión. Es un país donde el consumo en esparcimiento en los sectores más afectados tiende a decrecer y donde las familias de ingresos medios destinan una porción no menor de sus ingresos a bienes y servicios que les aseguren la seguridad que el estado no garantiza.

Se calcula que los países de región Latinoamericana asumen costos de productividad cercanos al 13% del PBI por las causas directas e indirectas de la inseguridad⁶. Si extrapolamos ese porcentaje al PBI argentino, podríamos decir que los costos para nuestro país podrían ascender como máximo a 55.284 millones de pesos, mas del doble de lo destinado en el presupuesto 2011 a los Ministerios de Justicia y Seguridad nacionales (que suman unos 26.516 millones de pesos).

En conclusión, la inseguridad resulta ser un factor regresivo para las economías de los países y muy especialmente en América Latina. Afecta seriamente su desarrollo económico y social, y su crecimiento afecta especialmente a los sectores más desfavorecidos, aquellos que no pueden destinar recursos económicos a la prevención delictiva. Se crea de este modo un círculo vicioso donde la desigualdad genera inseguridad que a la vez genera más desigualdad.

Por los motivos anteriormente expuestos, las políticas públicas destinadas a reducir la criminalidad son, al contrario de la creencia popular, políticas de corte netamente progresistas. Si son exitosas, pueden aumentar la productividad de la economía, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, disminuir el gasto público, aumentar el nivel de empleo, y elevar en términos generales la calidad de vida de la sociedad toda.

Las políticas de seguridad pública deberían necesariamente ubicarse entre las primeras prioridades de cualquier gobierno. Las políticas destinadas a la prevención y persecución del delito deben contar con el suficiente financiamiento, ya que como ha quedado demostrado, en materia de seguridad no se gasta, se invierte y el producto de esa inversión no es solo un país más justo sino también es un país más equitativo, más productivo, y con más oportunidades.

Una Argentina más insegura es una Argentina más pobre, pero también es una Argentina más desigual. ■

5. DI TELLA, Rafael, GALIANI, Sebastian, SCHARGRODSKY, Ernesto, “Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave” en “The Economics of Crime - Lessons for and from Latin America”, Chicago, University of Chicago Press, 2010, pp 175-206.

6. SOARES, Rodrigo, NARITOMI, Joana, “Understanding High Crime Rates in Latin America: The Role of Social and Policy Factors” en “The Economics of Crime - Lessons for and from Latin America”, Chicago, University of Chicago Press, 2010, pp 23-27.